

Dirigente chileno le dice a los EU: Díganle no al plan fascista de pensiones

Si tuviera la oportunidad de hablar ante una comisión del Congreso estadounidense sobre el sistema privatizado de pensiones de Chile, ¿qué le diría? Ésa fue la pregunta que EIR le hizo a Arturo Martínez, presidente de la federación de trabajadores más grande de Chile, la Central Unitaria de Trabajadores o CUT, el 14 de diciembre. Su respuesta fue contundente:

“Diría yo que no pueden repetir el fracaso de Chile; el sistema está fracasado. En Chile estamos remplazando ese sistema porque se colapsó. Y no pueden los EU estar tratando de instrumentar un sistema que se hizo a sangre y fuego por Pinochet, y al final terminó imponiéndolo por la fuerza. Los EU por lo menos tendrán que debatir con la gente que es lo que quieren hacer por el futuro de las pensiones en ese país. Pero no pueden copiar un modelo fascista, un modelo de capitalización individual que solamente existe para que ganen plata para los inversionistas. La plata de los trabajadores se está invirtiendo, y ellos [los inversionistas] están ganando mucha plata. Pero los trabajadores no capitalizan”.

Martínez hizo su advertencia al final de la entrevista telefónica que le concedió a EIR desde Santiago de Chile el 14 de diciembre. A Martínez, un dirigente laboral que el régimen del general Augusto Pinochet (1873–1990) envió a prisión por más de ocho años, lo eligieron presidente de la CUT en el 2000, y en agosto de 2003 organizó el primer paro nacional en el país en casi 20 años, contra los renovados esfuerzos por profundizar la destrucción de las garantías sociales y laborales, esfuerzos por los que el “modelo económico chileno” es infame. A continuación reproducimos la totalidad de la entrevista.

EIR: ¿Me puede decir cómo ve la CUT el plan privatizador de las pensiones de Chile, y cómo les ha impactado?

Martínez: Éste tiene 23 años, eso de la privatización de las pensiones. Y en 23 años ya puede uno tener una evaluación muy concreta. Primero, tiene un problema grande, que tiene que ver con la cobertura. En nuestro país han ingresado a este sistema unos 6,4 millones de trabajadores, y se mantienen cotizando normalmente 2,9 millones.

EIR: Cuando usted dice que se mantienen cotizando, ¿eso es cada mes?

Martínez: Cada mes: unos entran, otros salen. Entonces, la pregunta es: primero, no hay cobertura total, o sea, es una cobertura débil. No alcanza a cubrir el 50% de la fuerza de trabajo. Esto ocurre porque el trabajo en Chile es esporádico;



Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT).

son trabajadores por temporadas. . .

Lo segundo es el nivel de suficiencia: la tasa de remplazo que van a conseguir los que sí están cotizando, no va a alcanzar la pensión mínima. No van a juntar fondos el 58% de los 2,9 millones; no van a tener fondos para pensionarse, para obtener la pensión mínima. Y el Estado va a tener que cubrir la diferencia, siempre que éstos tienen 20 años de cotización.

EIR: ¿Y para los otros?

Martínez: Los que no tienen 20 años no les cubre la diferencia, que son muchísimos. Y ahí está el tema de los trabajadores eventuales que trabajan tres meses, cuatro meses salen del empleo; están desempleados 4, 5 meses, y vuelven a buscar un trabajo. Están tres meses, y vuelvan a entrar. Entonces, hay mucha movilidad de la fuerza laboral.

EIR: ¿Ustedes tienen una estimación de cuántos están en estas condiciones?

Martínez: El número de trabajadores con relación laboral con una contraparte es aproximadamente de 3,8 millones de trabajadores. Y de éstos, 2,6 millones están en esta condición de trabajo eventual —con contrato por obra, con contrato a plazo fijo— sin derechos previsionales, y menos con derecho de pensión. O sea, de los trabajadores chilenos, la gran mayoría no tiene seguridad social.

EIR: ¿Y eso incluye también al sistema de salud?

Martínez: Exactamente. Entonces toda esa gente pasa a ser una carga para el Estado, porque se atienden como indigentes. El peso para el Estado es una tremenda responsabilidad, porque los atiende el sistema de salud como indigentes, y des-

pués, cuando llegan a la vejez, los vuelve a atender en las pensiones como indigentes, dándoles pensiones asistenciales.

Este sistema es bueno para los que tienen remuneraciones altas. Pero es muy malo para la gente que tiene remuneraciones medias y bajas. Y es malo también para la gente que tiene trabajos temporales, eventuales y transitorios.

EIR: Que son la mayoría, parece.

Martínez: Que son la mayoría. Es tanto que, en el mes de enero del próximo año, el 2005, se inicia el proceso de debate sobre la reforma de pensiones en Chile.

EIR: ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿En el Congreso?

Martínez: Primero, el gobierno va a plantear el tema. Y el gobierno tiene que legislar sobre un nuevo sistema de pensiones en Chile, porque la nueva realidad laboral que tenemos no da cuenta de esta situación, ya que cuando se hizo ese sistema —hace 23 años— no había tanta movilidad laboral. Tenemos un sistema colapsado, que tiene un tremendo costo para el Estado. Y además de eso es deficiente en el beneficio y deficiente en la cobertura.

EIR: Eso de la “movilidad laboral” es un plan del Banco Mundial.

Martínez: Es el salvajismo. Y el Banco Mundial ha venido a Chile a decir que quiere más movilidad todavía, más flexibilidad laboral. Nosotros acabamos de parar el sistema de la flexibilidad, por lo menos de aquí a que cambie el gobierno. No sabemos qué gobierno va a haber. Tuvimos que hacer una huelga general.

EIR: ¿Cuándo fue eso?

Martínez: El 23 de agosto del 2003. Y ahora estamos preparándonos para el próximo año, porque vuelven a insistir en el tema de la flexibilidad laboral. Chile es el país que más flexibilidad laboral tiene.

EIR: Y mire los resultados. Eso es muy importante para los EU. En otros países también, pero es importante que se entienda eso en los Estados Unidos, porque es todo el sistema, no es solamente la seguridad social.

Martínez: Es un sistema que se instaló acá, pero que se ha ido incrementando en otros países. No con el salvajismo que ha tenido acá, pero siempre es la misma línea. Nosotros lo que estamos planteando es reformar este sistema, crear una AFP (administradora de fondos de pensiones—Ndr.) pública, y con un pilar solidario donde haya un aporte de parte del empleador y también de parte del Estado, para asegurar un nivel de suficiencia en las pensiones, porque la capitalización individual no da resultados para los trabajadores, sobre todo para las rentas bajas.

EIR: ¿Tienen una propuesta ya escrita?

Martínez: Sí, tenemos una propuesta escrita que la vamos a dar a conocer el 10 de enero.

EIR: Es muy interesante el hecho de que hoy en Chile, justo cuando Bush está intentando hacer su gran campaña para el modelo chileno. . .

Martínez: ¡Está colapsado! Estamos en un debate sobre cómo reformar las pensiones, porque el modelo está colapsado. Y no entiendo cómo Bush lo quiere instalar en su país.

EIR: Es que él se cree Dios. Si usted tuviera la oportunidad de hablar ante una comisión del Congreso de los EU, ¿qué le diría sobre esto?

Martínez: Diría yo que no pueden repetir el fracaso de Chile; el sistema está fracasado. En Chile estamos reemplazando ese sistema porque se *colapsó*. Y no pueden los EU estar tratando de instrumentar un sistema que se hizo a sangre y fuego por Pinochet, y al final terminó imponiéndolo por la fuerza. Los EU por lo menos tendrán que debatir con la gente qué es lo que quieren hacer por el futuro de las pensiones en ese país. Pero no pueden copiar un modelo fascista, un modelo de capitalización individual que solamente existe para que ganen plata para los inversionistas. La plata de los trabajadores se está invirtiendo, y *ellos* [los inversionistas] están ganando mucha plata. Pero los trabajadores no capitalizan.

Chile: un escaparate sinarquista

por Dennis Small y Cynthia R. Rush

Si el presidente estadounidense George W. Bush y sus controladores se salen con la suya, pronto los Estados Unidos seguirán los pasos de Chile. . . derechito al infierno. El propio Bush ha sido explícito. En una reunión de la APEC que tuvo lugar en Santiago de Chile del 19 al 21 de noviembre, Bush dijo que “Chile es un gran ejemplo de una reforma al Seguro Social”.

A lo mejor todavía no le avisan al presidente Bush, pero lo que sus controladores sinarquistas pretenden copiar del modelo chileno es más que la privatización del Seguro Social. Chile es su conejillo de indias para probar:

1) el saqueo ilimitado de la economía física y la fuerza laboral del país en tres décadas de aplicación de la doctrina lunática del libre comercio, tal como la urdieron los famosos “Chicago Boys”, discípulos de George Shultz y Milton Friedman;

2) la desintegración por insolvencia del sistema de banca nacional en medio de una nube de especulación financiera, y su resurrección basada más que nada en un gigantesco flujo de ingresos cautivos procedentes de la privatización del Seguro Social; y,

3) el uso del terror político impasible y la represión del Estado policíaco contra toda oposición potencial a estas medidas, incluso contra “la formación de equipos especiales de los

países afiliados, quienes habían de viajar a cualquier parte del mundo a países no afiliados para imponer sanciones —incluso el asesinato— contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas”.

Éstas son las palabras empleadas en un memorando desclasificado del FBI de 1976, para describir el funcionamiento de los escuadrones de la muerte que creó la dictadura de Pinochet en Chile, junto con otros cinco gobiernos sudamericanos, bajo el nombre clave de *Operación Cóndor*. Si leer esta cita les pone la carne de gallina porque suena igualito a una de las últimas conferencias de prensa del vicepresidente estadounidense Dick Cheney, o a un devaneo reciente de Donald Rumsfeld, entonces empiezan a captar el asunto:

Éstas son las mismas fuerzas sinarquistas que pretenden instaurar las mismas políticas fascistas para defender el mismo sistema económico quebrado. Chile no está “por allá”; está aquí.

1. El Seguro Social: ‘Pero si funcionó en Chile. . .’

No, la privatización del Seguro Social *no* funcionó en Chile, excepto para los banqueros extranjeros que se robaron el dinero.

El Seguro Social fue privatizado en Chile en 1981, según las especificaciones del ideólogo y economista montpelerinista adiestrado en Harvard, José Piñera, quien fue ministro del Trabajo de Pinochet en 1978–1980. Después de 23 años de funcionamiento, el sistema chileno es un fracaso tan grande, que casi todas las fuerzas políticas del país —laborales, empresariales, gubernamentales y políticas— concuerdan ahora en que debe de echarse por la borda, e idearse alguna suerte de alternativa. De hecho, el Congreso chileno está estudiando una propuesta del *Gobierno* sobre cómo remendar el sistema quebrado, ¡al mismo tiempo que el Gobierno de Bush pretende venderle la misma idea al Congreso estadounidense!

He aquí la verdadera historia de la privatización del Seguro Social en Chile.

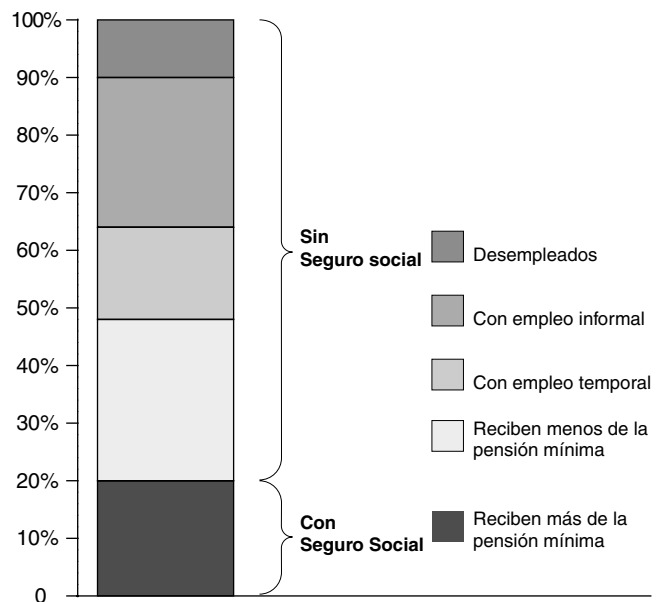
En 1973, cuando el golpe de Estado de Pinochet, Chile tenía un sistema de seguridad social al estilo estadounidense de “paga sobre la marcha”, al que tanto el trabajador como su empleador contribuían, y el cual comprendía a cerca del 78% de la fuerza laboral.

Piñera y los Chicago Boys del general Pinochet le dijeron a los trabajadores chilenos, mediante una escandalosa campaña publicitaria multimillonaria, lo mismo que Bush está diciéndole a los estadounidenses hoy. Un gran número de fondos (administrados por bancos, aseguradoras y otros buitres financieros) les ofrecerán a los trabajadores una serie de “alternativas” sobre cómo y dónde invertir su dinero, sin intermediación del gobierno. Les prometieron altos rendimientos y un futuro seguro, de cambiarse del sistema gubernamental a los fondos privados.

GRÁFICA 1

Cobertura del Seguro Social en Chile

(% de la fuerza laboral)



Fuentes: CENDA (Chile); EIR.

Lo único que los “inscritos” tendrían que hacer, sería permitir una retención obligatoria del 12,5% de su sueldo mensual para depositarlo en la administradora de fondos de pensiones (o AFP, como las llaman en Chile) de su preferencia, la cual entonces invertiría “con prudencia” el dinero. A diferencia del sistema viejo, los empleadores no harían ninguna contribución en lo absoluto.

Un millón de trabajadores chilenos se cambió al nuevo sistema en 1981. Les ofrecieron incentivos y remuneraciones, incluso un aumento salarial inicial. “De hecho, a la mayor parte de la fuerza laboral chilena la obligaron a integrarse al nuevo sistema, aun a aquellos trabajadores contratados desde 1981 a los que no les dieron ninguna alternativa”, según el economista chileno e investigador de la ONU Manuel Riesco, quien es miembro de la directiva del CENDA (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo).

¿Cuál es la situación de esos trabajadores ahora? Riesco responde:

“Si dos colegas trabajadores alcanzan la jubilación en Chile hoy, ambos con el mismo salario y el mismo tiempo aportando al Seguro Social, y uno se quedó en el antiguo sistema público y el otro se mudó al sistema privatizado en 1981, éste recibirá menos de la mitad de la pensión que el primero”.

¿Cómo es eso posible?

Vean la **gráfica 1**, que desglosa la cobertura del Seguro Social para la fuerza laboral chilena de 6,1 millones de traba-

jadores en la actualidad (la población total es de unos 16 millones de habitantes). Para empezar, hay un desempleo oficial del 10%, y otro 26% (o 1,6 millones) está subempleado en la mentada “economía informal”, o sea, en el gran segmento de la economía de las naciones iberoamericanas que incluye desde las actividades extracontables semilegales, hasta las de plano ilegales. Los vendedores ambulantes y los mendigos son los casos clásicos de semejante “empleo” informal. Ninguno de ellos contribuye al sistema, y ninguno de ellos obtiene nada de él. En términos de la realidad físico-económica, también están desempleados *de facto*.

Al menos otro millón de trabajadores (o 16% de la fuerza laboral) está subempleado en trabajos temporales, que pueden durar desde unos cuantos meses hasta menos de un año. La mitad de estos empleos dura menos de cuatro meses. Esta clase de inseguridad y de reciclaje laboral está tan extendida en Chile, que muchos analistas calculan que son mucho más de un millón. Según el instituto de investigación chileno Terram, 93% de los empleados nuevos no durarán más de un año trabajando. Tales trabajadores casi nunca califican para el Seguro Social, porque con la ley fascista de Piñera un trabajador tiene que aportar al mismo durante 20 años para poder recibir prestaciones al momento de su retiro.

Esto ya representa 52% de la fuerza laboral, que no recibe *nada* del sistema privatizado de seguridad social. El 48% restante paga sus cuotas al sistema con cierta regularidad, pero 28% de la fuerza laboral, o 1,7 millones de trabajadores, ni siquiera calificará para recibir la pensión mínima que garantiza el Estado, que es de 110 dólares mensuales. En otras palabras, su inversión en las AFPs rinde menos de 110 dólares mensuales, y el Gobierno chileno tiene que aportar la diferencia para completar esa cantidad *por fuera del presupuesto federal*. Pero la mayoría de la gente en esta situación ni siquiera solicita esta “pensión asistencial” que ofrece el Estado, misma que hoy asciende a unos 50 dólares mensuales y que, en cualquier caso, tiene como límite otorgar 300.000 de tales pensiones; y la lista de espera es larga. Para calificar siquiera para semejante ayuda, un trabajador tiene que probar que es “indigente” (al igual que con las reformas fascistas del plan Hartz IV en Alemania). El único recurso que le queda es sacar los escasos fondos acumulados en su cuenta individual de pensión una vez que pasa al retiro; eso asumiendo que la especulación de su AFP con derivados financieros no los haya perdido.

En resumidas cuentas, sólo 1,2 millones de trabajadores chilenos —apenas 20% de la fuerza laboral del país— califican para recibir una pensión mayor al mínimo de 110 dólares mensuales.

Enron no tuvo nada que ver con las AFPs de Chile

La verdad es que el sistema privado de pensiones de Chile es una enorme estafa a la Enron. Los tiburones financieros que la organizaron nunca pretendieron que fueran otra cosa que un mecanismo para saquear la fuerza laboral y la economía física, mientras que ellos y sus depredadores financieros

aliados sacaban jugosas ganancias.

Para empezar, las AFPs cobran comisiones leoninas por sus servicios. El Superintendente de las Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) calculó que, para marzo del 2002, entre 25 y 32% de cada retención salarial obligatoria fue para pagar las “comisiones” de las AFPs. Un informe del Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas de mayo del 2002, escrito en colaboración con expertos chilenos, encontró que la cifra asciende a cerca de 500 millones de dólares en comisiones anualmente. Entre 1981 y diciembre del 2000, las comisiones sumaron 6.200 millones de dólares. Comparando a *grosso modo* esta cifra con los 35.500 millones en activos administrados por las AFPs hasta fines del 2001, representa cerca del 20% del total.

Según el informe, los dueños de las AFPs obtuvieron ganancias promedio del 33,8% en el 2001, y del 50,1% en el 2002 (un año de recesión económica en Chile). Uno de los fondos más grandes obtuvo ganancias del 209,8% ese año! De 1997 al 2004 la utilidad anual promedio fue de un nada despreciable 50%. El profesor chileno de Derecho Juan Gumucio correctamente señaló que los administradores de las AFPs “ganan más dinero que los narcotraficantes que venden polvo blanco”.

CENDA concluye que el sistema privatizado de pensiones del país es la “industria más protegida en la historia de Chile, creada por los que criticaron nuestra protección previa de la industria”. Los Chicago Boys de Shultz no están en contra del proteccionismo, siempre y cuando ellos sean los beneficiados.

Al tiempo que las AFPs se sacaron la lotería, no fue lo mismo para sus afiliados. ¿A dónde fue a parar su dinero? En 1981 el total de los activos administrados por las AFPs era de unos 22 mil millones de dólares. Un informe del Banco Mundial de 1997 documentó que, aunque el rendimiento promedio de los fondos invertidos de los trabajadores empezó en 12,7% en 1982, cayó de forma progresiva en el transcurso de la década siguiente. Según un estudio de la Fundación Century, para 1994 más de la mitad de las AFPs reportaban pérdidas. En 1995 alrededor de dos terceras partes de lo que entonces eran 25 mil millones de dólares de un fondo nacional de pensiones, estaban invertidos en instrumentos financieros altamente especulativos ligados a la burbuja internacional de los derivados. En septiembre de 1995 los fondos perdieron 1.500 millones de dólares de su valor, con un rendimiento negativo real del -2,5% ese año.

Un estudio de la firma bursátil chilena CB Capitales encontró que el verdadero rendimiento de las cuentas individuales de las AFPs ha promediado sólo 5,1% desde 1982.

Hoy 33% de los fondos de las AFPs, que ascienden a 36 mil millones de dólares, está invertido en la deuda del Gobierno chileno, la cual, en las condiciones actuales de derrumbe del dólar y de trastorno financiero mundial, difícilmente puede calificarse de estable. Las regulaciones actuales permiten invertir hasta un 12% de los fondos en el extranjero (y hay presión para aumentar ese porcentaje), y es muy proba-

TABLA 1

Administradoras de fondos de pensiones en Chile

(hasta noviembre del 2001)

Nombre	Control	Activos que administra (miles de millones de dólares)
Provida	BBVA (España); BofNY (EU)	11,3
Habitat	Citibank (EU)	8,0
Cuprum	Sun Life (Canadá)	5,8
Santa María	Aetna (EU)	4,5
Summa Bansander	Banco Santander (España)	3,9
Planvital	Chile	2,0
Total		35,5

Fuente: Salomon Smith Barney.

TABLA 2

Control extranjero de los fondos de pensiones y de los bancos

País	Año de su privatización	Activos de las pensiones administrados (miles de millones de dólares)	% en control extranjero	Activos bancarios (miles de millones de dólares)	% en control extranjero
Argentina	1994	22,2	91%	65,3	37%
Chile	1981	35,5	94%	159,4	6%
Colombia	1994	4,2	78%	31,9	17%
México	1997	22,3	77%	165,0	82%
Perú	1993	3,2	100%	17,1	63%
Total		87,4	89%	438,7	62%

Fuente: Salomon Smith Barney; EIR.

ble que esta tajada termine en los inestables mercados globales de derivados. El resto va a parar a los inestables valores hipotecarios y a la deuda de los bancos.

Los dueños sinarquistas

¿Quiénes son los verdaderos dueños de las AFPs chilenas? Luego de comenzar con 18 fondos en 1981, hoy sólo quedan 6, y 5 de ellos están en manos de extranjeros, que controlan 94% de los activos administrados (ver **tabla 1**). En otras palabras, los Chicago Boys de Shultz le entregaron a sus compinches banqueros sinarquistas internacionales más de 36 mil millones de dólares que les pertenecen a los trabajadores chilenos. No es un mal botín.

Tomemos el caso del BBVA de España, el cual controla casi una tercera parte del sistema de pensiones chileno. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria tiene nexos históricos con los círculos de lavado de dinero sucio, y —junto con Banco

TABLA 3

Los tres principales controladores de las pensiones y de los bancos en Iberoamérica

Banco	% de activos de las pensiones	% de activos bancarios
BBVA (España)	25%	8%
Citibank (EU)	12%	7%
Santander (España)	8%	9%

Fuente: Salomon Smith Barney; EIR.

Santander— ha sido la fuerza motriz de la recolonización imperial española de todo el sistema financiero de Iberoamérica, a nombre de intereses británicos. Banco Santander, el cual controla una de las principales AFPs de Chile, también es el mayor banco extranjero en Iberoamérica, pues controla 9% de los activos bancarios del continente.

Banco Santander es una verdadera fichita. Es un antiguo banco oligárquico español que data de 1857, y cuyo actual propietario, Emilio Botín, es considerado el hombre más rico de España. Con Botín, Santander estableció una

“alianza estratégica” en 1987 con nada más ni nada menos que el Royal Bank of Scotland (RBS), que está en el centro del aparato financiero de la familia real británica. Uno de los miembros principales de la directiva del RBS, el Earl de Airlie, hasta 1984 fue presidente de Schröders plc, el banco mercantil británico que, con su filial alemana, ayudó a financiar la subida de Hitler al poder en los 1930.

En 1999 Santander selló una segunda alianza estratégica con otra institución financiera sinarquista de hueso colorado: Assicurazioni Generali, la infame y ultrapoderosa aseguradora veneciana que ayudó a poner a Mussolini en el poder en Italia.

Paso que daba Chile rumbo a la privatización del Seguro Social, paso que el resto de Iberoamérica seguía (ver **tabla 2**). Los únicos países que todavía no lo hacen son Brasil y Venezuela. De los cinco principales sistemas privatizados, Chile es por mucho el más grande. Como también muestra la **tabla 2**, el nivel de control extranjero en esos cinco países es de un impresionante 89%, sobrepasando incluso el nivel de control bancario extranjero, el cual promedia un 62%.

Pero son los mismos bancos sinarquistas extranjeros los que controlan tanto a las AFPs como a los bancos comerciales: BBVA, Santander y Citibank (ver **tabla 3**).

¿A esto es a lo que se refiere Bush cuando dice que los EU deben de seguir el modelo chileno de reforma al Seguro Social? ¿De veras quieres poner tu pensión en manos de los

mismos banqueros sinarquistas que pusieron a Hitler y a Mussolini en el poder?

2. La economía: resucitando a un muerto

Veamos ahora el proceso económico más amplio del cual formó parte la privatización del Seguro Social de Chile; es decir, los otros aspectos del modelo chileno que Bush y sus amigos también pretenden calcar aquí. Para esto, recurrimos a un estudio que publicó *Resumen ejecutivo* en su número de la 1?? quincena de julio de 1995, y que desenmascaró el fraude que hubo detrás de la publicidad del llamado “milagro económico chileno”.

El 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet encabezó un golpe militar que derrocó al Gobierno socialista de Salvador Allende. Con Pinochet, Chile devino en el primer país del mundo en adoptar la charlatanería del premio Nobel de economía de 1976, Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, lugar donde George Shultz era la principal lumbrera económica. Desde el principio todos los asesores económicos clave de Pinochet eran Chicago Boys apoyados directamente por Friedman.

Como escribiera el *Economist* de Londres en su edición del 3 de junio de 1995, “por 25 años, Chile ha sido un laboratorio de experimentos políticos y económicos radicales, un conejillo de indias científico social”.

Estos fanáticos pronto transformaron a Chile en un escaparate del libre mercado. En la década siguiente hubo una reducción drástica de los aranceles; la moneda se dejó a la libre flotación; la mayor parte del enorme sector estatal fue privatizado y liquidado por una bicoca; el gasto del gobierno cayó por los suelos, en especial en el renglón del bienestar social; y el empleo y los salarios cayeron en picada, alimentando una descomunal burbuja especulativa.

El componente laboral de la política fue particularmente brutal. Según el libro de 1996 *Chile: The Great Transformation* (Chile: la gran transformación) de Javier Martínez y Álvaro Diz, la política laboral de entre 1973 y 1979 estuvo caracterizada por una “desregulación salvaje”. Los sindicatos desaparecieron, y las contribuciones del gobierno a los sindicatos, las negociaciones colectivas de trabajo y los aumentos salariales regidos por un índice quedaron eliminados. Uno de los renglones principales del paquete de reforma laboral introducido en 1979 por el ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera —el futuro arquitecto de la privatización del Seguro Social—, fue la abolición del salario mínimo.

Al principio, a las federaciones sindicales sólo les permitieron tener una función de asesoría, pero para 1981 las desaparecieron del todo. El derecho a huelga era permitido, pero sólo por un máximo de 60 días, después de los cuales los patrones podían declarar un cierre patronal, clausurar la em-

presa, despedir empleados, etc. Podía despedirse a los trabajadores sin motivo alguno. Para 1980 el número de trabajadores sindicalizados disminuyó a menos del 10% de la fuerza laboral. El tamaño promedio de los sindicatos quedó reducido a una tercera parte.

Para 1989 el trabajador promedio estaba en peores condiciones que en 1970, y la tasa de pobreza alcanzó el 41,2%. Mientras que en 1970 el 40% de la población más pobre ingería 2.019 calorías en su dieta diaria, para 1980 esta cifra cayó a 1.751 calorías, y a 1.629 para 1990. Entre 1972 y 1988 el porcentaje de chilenos sin vivienda adecuada aumentó de 27 a 40%. Hubo un crecimiento desordenado de las barriadas alrededor de Santiago, así como en otras ciudades importantes donde los pobres en su mayoría comían en comedores de beneficencia.

En 1975 el desempleo llegó al 18,7%, y registró un promedio del 15,7% en los 10 años siguientes. En cierto momento en 1983 el desempleo fue de 34,6%.

Hoy 77% de la fuerza laboral no ha terminado la educación media, y un 72% cae en la categoría de no calificada o semicalificada. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Chile sólo 30% de los empleos pueden calificarse como “decentes”, o sea, como un trabajo en el que existe un contrato laboral y se paga un salario justo que le permita al trabajador vivir con dignidad.

En estas condiciones inhumanas, 83% de los trabajadores trabaja un promedio de 11 horas diarias —el límite legal es de 10 horas—, según la Dirección del Trabajo de Chile.

En resumen, en las tres décadas desde que le impusieron a Chile las políticas británicas del libre mercado, la mayoría de los renglones de su *economía física* —que no deben confundirse con parámetros monetarios engañosos como el producto interno bruto (PIB)— cayeron per cápita y por hogar. Sin embargo, en este período la burbuja especulativa de la deuda externa se multiplicó varias veces, mientras que los intereses de dicha deuda fueron pagados con religiosidad a los bancos acreedores y al FMI.

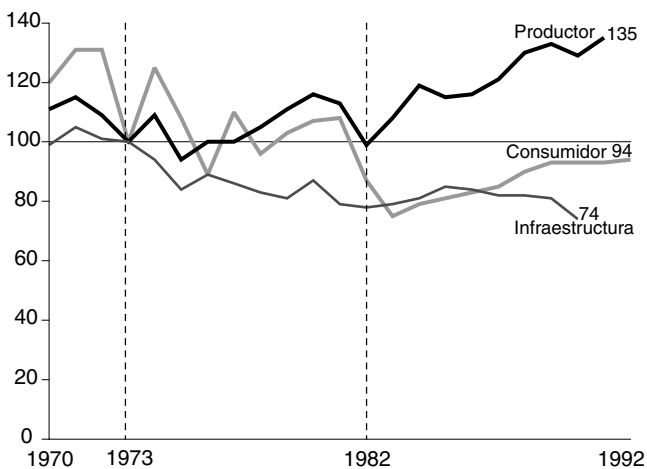
Estas políticas sumieron al país en la bancarrota a fines de 1982, pero entonces las continuaron en una forma algo modificada desde 1983 hasta el presente. Al imponerle un nuevo paquete de ahorro drástico forzoso —incluyendo la privatización del fondo nacional de pensiones—, los banqueros se las arreglaron para seguir saqueando la economía a fin de pagar la deuda externa.

Para la élite financiera internacional, Chile es un experimento que demuestra cómo puede saquearse a un país hasta el punto de la desintegración, y luego saquearlo otra vez. Como el *Economist* de Londres ni tardo ni perezoso le aseguró a sus lectores, “el derrumbe de 1982, a pesar de todo, no provocó ninguna desviación fundamental de los objetivos básicos de la liberalización comercial y de contar con un sector estatal menguante”. En cambio, Chile alteró ligeramente las mismas políticas neoliberales, puso la inflación monetaria bajo control, y estableció una nueva base más estable para

GRÁFICA 2

Producción económica física de Chile

(índice 1973 = 100)



Fuente: ECLA; Banco Central de Chile; EIR.

continuar con el saqueo de la deuda. El 6 de junio de 1995 el *Washington Post* explicó el asunto: lo que Chile demuestra es que “los caídos pueden volverse a levantar. . . luego del espectacular derrumbe económico del país en 1982”.

El mito desaparece

Veamos el desempeño de la economía física de Chile desde 1970 hasta principios de los 1990, medida en *unidades físicas* (toneladas, megavatios-hora, etc.) per cápita, por hogar y por kilómetro cuadrado. Y después veamos sus tendencias en yuxtaposición con el crecimiento de la burbuja de la deuda externa del país en las últimas décadas.

La **gráfica 2** muestra la creación de canastas básicas de bienes de consumo, de producción y de infraestructura en Chile, como las midió en términos per cápita el estudio de *Resumen ejecutivo* de 1995. La primera curva a analizar es la de la producción de bienes de consumo. Noten que *no* es un índice de consumo —que también tendría que tomar en consideración las importaciones y las exportaciones—, sino más bien la habilidad de la economía chilena de producir sus propios bienes de consumo. Aunque los productos que incluye el índice (cereales, carne, leche, leguminosas, frutas y verduras, automóviles y televisores) de ningún modo están detallados, sí bastan para indicar la tendencia y la magnitud general de los cambios involucrados.

Como muestra la **gráfica 2**, la producción de bienes de consumo de Chile ya iba cuesta abajo con Allende en 1970–1973, y después se hundió otro 13% (de un índice de 100, a 87) en los primeros nueve años del reinado de los Chicago Boys. Aunque ha habido una recuperación marginal desde 1982, el nivel de 1992 todavía era 6% inferior al de 1973.

En otras palabras, luego de dos décadas del dogma del libre comercio, la economía física de Chile es aun *menos* capaz hoy de satisfacer las necesidades de consumo de su propia población, de lo que era cuando los Chicago Boys tomaron el poder. En esta categoría la producción de alimentos fue relativamente mejor que la de bienes de consumo manufacturados.

La **gráfica 2** también muestra un índice de producción de una canasta de nueve bienes de producción por hogar, que fue apenas marginalmente mejor que el de bienes de consumo. Después de una década de estancamiento, el índice subió a un nivel de apenas 135 en 1991. Si analizamos el período desde 1973, esto promedia un ritmo de crecimiento de menos de 1,7% anual. Aunque, por supuesto, esto es mejor que una disminución, semejante ritmo de crecimiento es patético comparado con casos de veras exitosos de desarrollo económico, tales como Corea del Sur o Japón, que seguido muestran tasas de crecimiento real de más del 10% anual en las mismas categorías.

Cabe señalar que la categoría de bienes de producción incluye tanto productos manufacturados como la producción minera y de otras materias primas. Cuando observamos con cuidado, resulta que el componente manufacturero del índice creció con mucha mayor lentitud que el promedio; en otras palabras, la mayor parte del crecimiento de Chile en los bienes de producción luego de 1982 vino de materias primas como el cobre. La producción de cobre por hogar aumentó 79% entre 1973 y 1993, promediando un ritmo anual del 3%, casi el doble que toda la categoría de bienes de producción. La producción de cobre, así como la de otras materias primas, fue impulsada para la exportación, más que para el consumo doméstico. Esto apunta al hecho de que los pocos renglones en los que la economía física de Chile *sí* creció, fueron principalmente los que benefician la exportación, para poder abonarle a la deuda externa, y no la clase de producción industrial que desarrolla la economía interna.

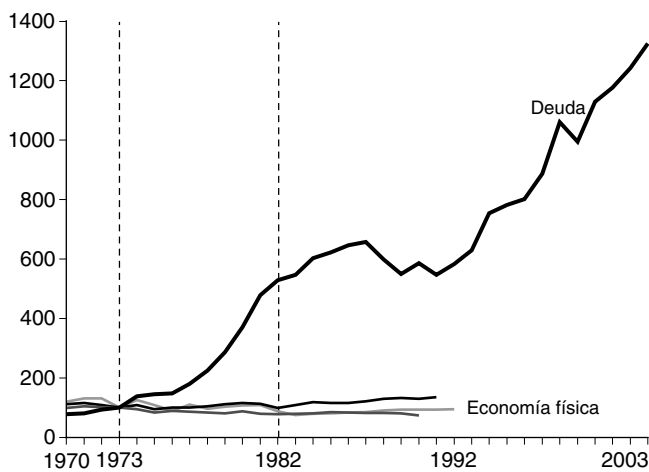
La **gráfica 2** también muestra el comportamiento de un índice de producción de bienes de infraestructura. Esto incluye la “infraestructura dura”, como el número de envíos de carga por ferrocarril y la capacidad eléctrica instalada por hogar, y los indicadores de la “infraestructura blanda”, entre ellos el número de camas de hospital y la cantidad de inscripciones escolares per cápita. Es aquí donde uno aprecia el impacto más profundo de los cortes al gasto gubernamental de Chile al estilo de la Revolución Conservadora de los EU, pues la infraestructura tiende a depender mucho más de la intervención directa del Estado que las categorías de los bienes de consumo o de producción. Como muestra la gráfica, la infraestructura fue devastada en la primera década de destrucción de los Chicago Boys, y continuó decayendo en la segunda década. En este período de 20 años Chile perdió más de una cuarta parte de la capacidad de su infraestructura instalada.

Ésta es una catástrofe físico-económica. El desarrollo de la infraestructura desempeña una función vital en una econo-

GRÁFICA 3

Chile: deuda vs. economía física

(índice 1973 = 100)



Fuente: ECLA; Banco Central de Chile, Banco Mundial; EIR.

mía viable, al mejorar la productividad del trabajo en general. Así, un derrumbe del 26% en la infraestructura implica un descenso impresionante en la eficiencia, y aumenta el costo social de la producción en todas las esferas de la economía.

Comparen esto con el crecimiento geométrico de la cancherosa deuda externa de Chile, de 1973 a la fecha (ver **gráfico 3**). Mientras que la economía física del país iba decayendo, los Chicago Boys y sus patrocinadores internacionales estaban gestando una gigantesca burbuja de deuda externa especulativa. De apenas 3 mil millones de dólares en 1973, creció por unos años, y luego en 1977 se disparó por las nubes. En tres años se duplicó, de 6 mil millones de dólares a 12 mil millones, y para 1982 había sobrepasado los 17 mil millones. Hoy anda en 43 mil millones de dólares. Como muestra la **gráfico 3**, la deuda externa de Chile ha aumentado más de diez veces en las últimas tres décadas.

Como muestra la **gráfico 4**, en 1980 la deuda externa era de 12 mil millones de dólares, y en los siguientes 23 años Chile pagó un total de 42 mil millones en intereses acumulados. Sin embargo, a pesar de que en este período solamente de intereses se pagó tres veces y media la deuda original, para el 2003 la deuda externa *aumentó* de 12 mil millones de dólares a 43 mil millones. En otras palabras, $12 - 42 = 43$, según parece. Esto es lo que puede llamarse la “aritmética de los banqueros”.

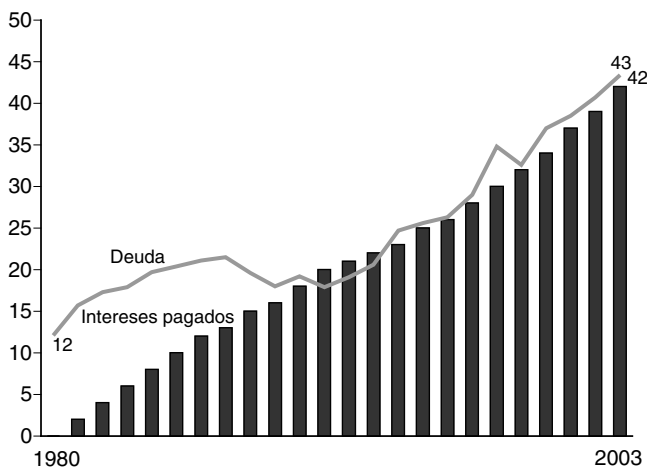
Semejante pago sistemático de su deuda externa a costa de la economía física, ha colocado a Chile a la cabeza del grupo de naciones iberoamericanas en el pago de intereses per cápita con un total acumulado de 1.615 dólares per cápita pagados entre 1981 y 1993. Sólo Venezuela pagó más que eso.

Chile pudo hacer esto, en especial de 1982 en adelante, porque toda la economía fue destazada para cortar de forma drástica el consumo nacional, y para canalizar en cambio una

GRÁFICA 4

Cómo funciona la aritmética de los banqueros en Chile

(miles de millones de dólares)



Fuente: Banco Mundial.

porción siempre mayor de la producción nacional a la exportación, a fin de obtener dólares para pagar deuda.

¿Es ésta la política que quieren que Shultz y Bush reimporten de vuelta ahora a los EU?

3. El terror político: la maquinaria asesina de la Operación Cóndor

A George Shultz le encanta alegar que sólo está a favor de la política *económica* del modelo chileno, y no de sus “excesos políticos”. Por ejemplo, en una entrevista que le concedió a la televisora PBS en octubre del 2000, dijo que Chile “contaba con la única economía decente de Sudamérica a mediados de los 1980 y después”, pero que la dictadura de Pinochet “sin duda hizo cosas innecesariamente brutales en el proceso”. El zar de la privatización del Seguro Social, José Piñera, también gusta de lavarse las manos en cuanto a las “violaciones a los derechos humanos” ¡que el Gobierno al cual sirvió durante años cometió!

Pero hay un hecho que Shultz y Piñera conocen perfectamente bien: el terror político, la represión, los secuestros, los asesinatos y el genocidio descarados de la era de Pinochet fueron el elemento *sine qua non* del “éxito” del modelo económico chileno. Fueron parte integral del saqueo de corte nazi de la fuerza laboral y la economía física chilenas.

Primero, el sangriento golpe de Pinochet del 11 de septiembre de 1973 fue orquestado por los sicarios sinarquistas George Shultz y Henry Kissinger desde el Gobierno de Ri-

chard Nixon, como todo mundo sabe.

Segundo, a lo largo de su régimen de 1973–1990, Pinochet silenció la disidencia bajo su bota militar. El anciano dictador enfrenta hoy el enjuiciamiento por varios de estos casos, incluyendo el secuestro de nueve disidentes y el asesinato de uno de ellos durante su régimen. Como el juez chileno Juan Guzmán dictaminó el 13 de diciembre de 2004 que Pinochet, de 89 años de edad, era “mentalmente competente para enfrentar un proceso criminal en Chile”, el caso procederá, y quizás se le sumen cargos relacionados con 8 millones de dólares (de un total de 15 millones) que Pinochet depositó en cuentas secretas del Riggs Bank en Washington, D.C.

El asesor financiero de Pinochet, Oscar Aitken, le ha dicho a la prensa que el presidente del Riggs, Joseph Albritton, administraba personalmente las cuentas de Pinochet en ese banco, y que era el “mayor admirador de Pinochet del mundo bancario”. Según Aitken, Albritton le “prometió, y le dio, tasas de interés que duplicaban el capital del general Pinochet cada tres años”.

El Congreso chileno también está investigando los negocios de 38 parientes de Pinochet por lavado de dinero y evasión fiscal. Es revelador que el yerno de Pinochet, Julio César Ponce Lerou, fuera presidente de la agencia del Gobierno que supervisó la privatización de todas las empresas estatales durante la dictadura.

Las operaciones Cóndor y Gladio

Pero el control sinarquista internacional vertical ejercido sobre el aparato de terror asociado con la dictadura de Pinochet, puede verse con mayor claridad en la Operación Cóndor, en la cual las fuerzas militares y de inteligencia chilenas trabajaron con sus contrapartes de otros cinco países sudamericanos —Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay— de mediados de los 1970 a principios de los 1980.

Lyndon LaRouche describió esta operación en los siguientes términos, en un diálogo que tuvo a mediados de diciembre del 2004 con jóvenes australianos:

“El Gobierno de Pinochet y el golpe que llevó a Pinochet al poder en 1973 fueron parte de lo que bautizaron como la Operación Cóndor. La Operación Cóndor en realidad fue una operación homicida tipo Gestapo SS, usando como núcleo a gente que había sido exiliada de la Alemania Nazi, vía España, en las Américas. Eran parte de la llamada ‘línea de ratas’ nazis, nazis que eran buscados y que tuvieron suerte de encontrar nichos para su existencia en Bolivia (como en el caso de Della Chiaie, de Italia, quien era un nazi), Chile y Argentina.

“Desde principios de los 1970 hubo miles de muertos, de desaparecidos, en una operación de tortura y asesinato dirigida por estos nazis, llamada Operación Cóndor.

“En la Operación Cóndor el entonces dictador de Chile, Pinochet, era una figura clave. Otra figura central, por supuesto, fue Henry Kissinger, quien entonces era secretario de Estado; y también, más importante que Kissinger, lo fue George Shultz, quien es la figura decisiva de lo que llamaron los ‘Chicago Boys’, y quien organizó todo el paquete, incluso la



Henry Kissinger (izq.) y Augusto Pinochet (centro). En una reunión que tuvieron en 1976, Pinochet confirmó que el terror y los asesinatos de la Operación Cóndor eran una continuación de las políticas nazis.

dictadura de Pinochet y la inauguración de éste del sistema del Seguro Social en Chile”.

Al igual que la Operación Gladio de la OTAN en Europa, con sus unidades de “retaguardia”, Cóndor incluyó a ex criminales de guerra nazis y de las SS que huyeron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial a través de las mentadas “líneas de ratas”, además de fascistas de segunda generación. Por ejemplo, una de las actividades de la Operación Cóndor fue el apoyo al “golpe de la cocaína” de 1980, orquestado en Bolivia por el emigrado nazi Klaus Barbie.

La dirigencia de la Operación Cóndor salió de las facciones sinarquistas de las fuerzas armadas de la región, las cuales se coordinaban con las redes neofascistas que había detrás de la Operación Gladio y de la estrategia de tensión que engendró en Europa, en especial en Italia. Estos sinarquistas de la Operación Cóndor mataron, torturaron y “desaparecieron” a miles de iberoamericanos, para que Shultz y sus Chicago Boys pudieran aplicar sus políticas, no sólo en Chile, sino también en otros países de la región, como Argentina. En ese país, un golpe militar puso en el poder al oligarca capacitado por británicos José Martínez de Hoz a cargo de la economía del país en 1976, como ministro de Finanzas. Sus políticas recuerdan mucho las de los Chicago Boys de Chile.

Shultz, Kissinger y compañía supervisaban el proyecto sudamericano desde la cúspide. En el terreno, el terrorismo desatado por los sinarquistas de izquierda alimentó la barbarie militar de la Operación Cóndor, que terminó por tragarse a la región en una “guerra sucia” que atrapó a miles de inocentes en el fuego cruzado. Ejemplo de esto es la forma en la que el grupo secreto Tacuara de Argentina —una organización de los 1950 dirigida por los sinarquistas— se dividió en dos en los 1960: por un lado en los Montoneros, que son terroristas de izquierda, y por el otro en los Tacuara, el grupo terrorista de derecha. Estos dos grupos ayudaron a instigar la guerra

sucia de los 1970, en la cual la izquierda y la derecha se masacraban mutuamente, y la destruida nación Argentina quedó indefensa en garras de las políticas perversas de Martínez de Hoz.

Un memorando desclasificado del FBI presenta un escalofriante informe de primera mano, de cómo funcionaban los escuadrones de la muerte de la Operación Cóndor. Escrito por el “agregado” del FBI en Buenos Aires, Robert Scherer, el 28 de septiembre de 1976, el memorando informaba que la Operación Cóndor fue creada para vigilar y realizar operaciones conjuntas “contra blancos terroristas en los países afiliados”.

Scherer describe el alcance internacional de la Operación Cóndor al informar de su “fase tres”. Ésta involucraba “la formación de equipos especiales de los países afiliados, quienes habrían de viajar a cualquier parte del mundo a países no afiliados para imponer sanciones—incluso el asesinato—contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países afiliados de la Operación Cóndor”. De encontrar en Europa a un “simpatizante de terroristas” de un país afiliado, un equipo especial sería enviado al país en cuestión a “localizar y vigilar” el blanco; entonces un segundo equipo sería desplegado para imponer la “sanción” contra el mismo. Francia y Portugal fueron identificados como los países europeos mencionados “para posibles operaciones en la tercera fase de la Operación Cóndor”.

El memorando también discutía la probabilidad de que el

asesinato del ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Orlando Letelier, en Washington, D.C., en 1976, lo hubiera realizado un equipo de la Operación Cóndor: “No escapa al ámbito de la posibilidad el que el reciente asesinato de Orlando Letelier en Washington pudiera haberse ejecutado como una tercera fase de acción de la Operación Cóndor”. El ciudadano estadounidense Michael Townley, quien luego fue condenado por organizar el asesinato de Letelier, no sólo era miembro de la policía secreta chilena, la DINA, sino que se dice trabajó con italianos fascistas vinculados a la operación Gladio.

Los hechos que rodearon el intento de asesinato contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton mientras visitaba Roma en octubre de 1975, sugieren que hubo una coordinación más directa entre las operaciones Cóndor y Gladio. Dos neofascistas italianos, Pier Luigi Concutelli y Salvatore Fabbella, aliados del notorio nazi Stefano delle Chiaie, le dispararon a Leighton y a su esposa cuando regresaban a su departamento. Los dos sobrevivieron al ataque.

Los informes indican que Augusto Pinochet y el general Manuel Contreras (jefe de la DINA) se reunieron en 1975 con los dos sicarios italianos cuando asistieron al funeral del fascista español Francisco Franco en Madrid. Se dice que Contreras mantuvo una relación con Della Chiaie.

Entonces, éstos son los nazis que impusieron la privatización del Seguro Social al estilo chileno. ¿Estás dispuesto a dejarlos dirigir a los EU también?

El plan de Bush para asaltar a los Estados Unidos

Ojo con negociar el Seguro Social con el presidente que no ‘negocia consigo mismo’

por Paul Gallagher

Lyndon LaRouche y su movimiento están empeñados en aplastar la intentona del Gobierno de George W. Bush de privatizar el Seguro Social. Ni los congresistas ni las organizaciones pueden ponerse a “negociar” los términos de la entrega del Seguro Social. Todos los argumentos en pro de la privatización son mentiras deliberadas. Derroten a Bush en esto, o tendrán el fascismo en los Estados Unidos.

El despotriqué de Bush el pasado 20 de diciembre, cuando dijo que no revelaría nada sobre su plan privatizador —“¡No voy a negociar conmigo mismo!”—, indica que necesita un psiquiatra; pero también significa que lo han adiestrado a no decir ni una palabra, ni a admitir nada específico sobre el plan

de privatización de la Casa Blanca, ya que hacerlo desataría una resistencia enorme y furiosa contra el mismo.

La súbita carrera frenética privatizadora del Presidente la impulsan los banqueros de Wall Street y de la “Bóveda” de Boston, quienes quieren meter al mercado de acciones y bonos el flujo de 500.000 millones de dólares anuales que pagan los trabajadores estadounidenses en cuotas al Seguro Social. Durante el gobierno de George W. Bush los EU han venido a depender de *2.500 millones de dólares al día* en inversiones de otros países, para cubrir sus varios déficit gigantescos y deudas. Este enorme flujo de capital extranjero está disminuyendo, ya no es suficiente, y amenaza con cesar del todo de



El presidente George W. Bush ha emprendido una carrera frenética para privatizar el Seguro Social, algo que prometió no hacer durante su más reciente campaña presidencial. (Foto: Casa Blanca/Tina Hager).

desplomarse el dólar. Así que Wall Street le ha puesto el ojo a las cuotas del Seguro Social de los estadounidenses, para echarlas al resumidero de deuda que está tragándose a la economía.

A chuparle la sangre al Seguro Social

El Seguro Social de los EU, el cual beneficia en la actualidad a 47 millones de ancianos o discapacitados, y del cual dependen 12 millones de hogares para su sustento, ha acumulado un superávit de 2 billones, y un patrimonio de 3 billones de dólares, y continuará añadiéndole dinero a ese superávit por otros 15 años. Los gobiernos desde la época de Ronald Reagan han tomado prestado de forma impropia la mayor parte de ese superávit para cubrir los déficit del presupuesto federal. La **gráfica 1** muestra que el gobierno de Bush, que ha tomado prestado más de \$500.000 millones de dólares de ese superávit en cuatro años, ha creado, con sus recortes de impuestos y su destrucción de puestos de trabajo, un déficit de ingresos a largo plazo *mucho más grande* que cualquier déficit imaginable del Seguro Social. Ahora la Casa Blanca propone con disimulo: 1) *repudiar* cualquier obligación del gobierno para generar nuevas rentas futuras y reembolsarle al Seguro Social lo que le adeuda; 2) *despojar* a los trabajadores menores de 50 a 55 años de sus derechos futuros a Seguro Social, desviando sus cuotas hacia cuentas de inversión privadas manejadas por Wall Street; 3) *pedir prestados* billones de dólares más para pagar las prestaciones de los actuales jubilados y los sesentiocheros; y 4) *efectuar grandes recortes* de las prestaciones de esos jubilados, por medio del simple

truco de modificar el cálculo del costo de vida. La **tabla 1** muestra esos recortes; se trata de un análisis hecho por la Oficina de Presupuesto del Congreso del plan de la Comisión Presidencial, presentado en forma de proyecto de ley.

Esto traslada billones de dólares al mercado de acciones y bonos empresariales, saqueados a los trabajadores que vayan camino al próximo derrumbe bursátil.

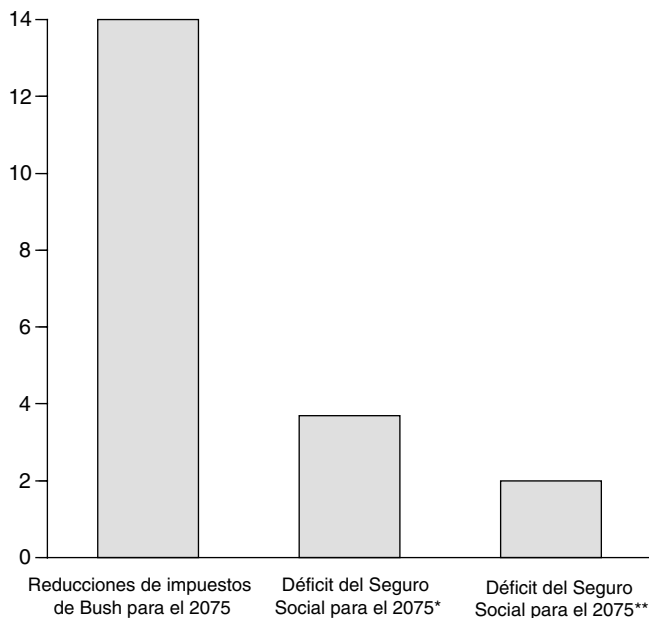
Si no se detiene a Bush, y le hace esto al Seguro Social, imaginen el recorte y robo a gran escala que se le hará a los programas de Medicare, Medicaid, a los seguros privados de pensión y a los salarios. Esto va al fascismo.

“¿Sociedad de propietarios?” Recuerden la farsa de “el automóvil del pueblo” (Volkswagen) del régimen nazi de Hitler. Millones de alemanes depositaron sus pa-

GRÁFICA 1

Las reducciones de impuestos de Bush crean un hueco presupuestal mucho mayor que cualquier déficit del Seguro Social, 2001-2075

(billones de dólares)



*Cálculo del Fondo del Seguro Social en el 2004

**Cálculo de la Oficina de Presupuestos del Congreso en el 2004

Fuente: Centro de Prioridades Políticas y Presupuestales de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes de los EU.

TABLA 1

Pensión de jubilación del 20% intermedio de los asalariados: la ley del Seguro Social vs. el típico plan de privatización*

(pensión anual en dólares)

Jubilados nacidos en	Con el Seguro Social	Con la privatización	Reducción
1940-49	14.900	13.900	6.6%
1950-59	15.200	13.000	15%
1960-60	15.500	13.200	15%
1970-79	17.700	14.200	20%
1980-89	19.700	16.200	18%
1990-99	18.100	14.500	20%
2000-09	19.900	14.600	27%

*Ley H.R. 3821 del representante republicano James Kolbe (por Arizona), analizada y evaluada por la Oficina de Presupuestos del Congreso. Fuentes: Oficina de Presupuestos del Congreso; EIR.

gos en su propia “cuenta privada” para adquirir su Volkswagen. Ninguno jamás obtuvo uno; simplemente les saquearon sus depósitos.

Drácula gastará 41 millones de dólares en anuncios

Un artículo del *New York Times* del 20 de diciembre muestra claramente que Wall Street y los bancos de Boston están actuando a través de ideólogos y de grupos de asesoría para engañar y presionar a favor de las privatizaciones. El más prominente de los ideólogos desplegados para destruir al Seguro Social es José Piñera, el mismo que, como ministro de Trabajo de Chile, privatizó la seguridad social a nombre de la dictadura fascista del general Augusto Pinochet en 1980–1981. El memorando que Piñera le dirigió a George Shultz en 1981, por solicitud de éste, fue el comienzo de los intentos de convencer a Ronald Reagan, y a todos los gobiernos desde entonces, de la necesidad de privatizar el Seguro Social. Piñera (ver ‘Perfiles de los sicarios’), y el ejecutivo del State Street Bank Corp., F. Gregory Ahern, han encabezado el proyecto del Instituto Cato sobre Alternativas al Seguro Social. Piñera

El predicador Pat Robertson y la seguridad social

por Harley Schlanger

Según consta en las transcripciones, en 1985–1986 Pat Robertson lanzó una andanada de ataques contra el Seguro Social en su programa de televisión “El Club 700”. Estos eran parte de su plan a favor de una “revolución cultural supradenominacional en el ámbito mundial”, una “renovación especial” que, según dijo, apuntaría contra la “centralización del poder en Washington”.

Robertson le dijo a los televidentes del “Club 700”: “No vamos a dejar que esos utopistas represivos de la Corte Suprema y de Washington nos sigan gobernando. No vamos a soportarlo. Vamos a decir que queremos libertad en este país, y que queremos que el poder y la libertad regresen al pueblo, donde debieran estar”.

Robertson lanzó su ataque contra el Seguro Social, usando las mismas tácticas alarmistas programadas para la campaña propagandística de enero de 2005. El 21 de mayo de 1985 dijo: “El gobierno anda asustado, no le dicen a nadie, pero anda muy asustado... Va a ocurrir un crac financiero horrible. Se repudiarán las deudas. Desaparecerá el Seguro Social. Mucha gente que piensa que tendrá su

Seguro Social no van a recibir ningún seguro social”.

El 14 de agosto de 1985 dijo que los jóvenes estadounidenses pagarían sus cuotas de Seguridad Social, pero, “por lo que está ocurriendo ahora mismo, no van a recibir ni un centavo”.

En 1986 inició una campaña para privatizar el Seguro Social. Afirmó en “El Club 700 que, “va a haber un problema trágico más o menos en el año 2030 para las personas que hoy tienen 25, 30 y 35 años, porque no habrá suficientes trabajadores. . . , no habrá suficiente dinero para cubrir la jubilación de los que hoy son jóvenes adultos. . . Y lo que tenemos que hacer. . . ahora mismo, es iniciar algún tipo de sistema privado obligatorio donde ellos puedan empezar a apartar su propio dinero por cuenta propia, para que dentro de 30 o 40 años tengan suficiente”.

La línea de Robertson es la de los “reconstruccionistas cristianos”, para quienes el Seguro Social es un pecado maligno contra el libre comercio y la desregulación total. Los reconstruccionistas, que son también posmilenaristas —es decir, que creen que el mal y los malvados tiene que ser derrotados en la Tierra para que Jesús pueda regresar (Bush acogió algunas de estas creencias posmilenaristas después de los atentados del 11 de septiembre)—, argumentan que el Gobierno nacional y los programas que se derivan de él, como el Seguro Social, son parte de un plan del humanismo secular para derrotar al cristianismo. La aniquilación del Seguro Social, alegan, es un aspecto esencial para establecer un gobierno bíblico en la Tierra.

y esta operación del Instituto Cato han sido los diseñadores y promotores, durante la última década, de los planes de privatización del Seguro Social que ahora fomenta sigilosamente George W. Bush. Ahern también es cabildero del Investment Company Institute, un brazo del negocio de los fondos mutuos.

El veneno ideológico de Piñera contra el Seguro Social, se evidencia desde la introducción de un manifiesto que redactó en 1996, mismo que todavía aparece al principio del sitio electrónico del Instituto Cato:

“Un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de los sistemas de pensiones quebrados manejados por el Estado. El sistema de pago de pensiones a medida que se reciben los ingresos. . . destruye, a nivel individual, el vínculo esencial entre el esfuerzo y la recompensa. . . El resultado es el desastre”.¹

Este fascista ex ministro chileno, Piñera, quien piensa que el *éxito* del Seguro Social destruye el “esfuerzo” de los estadounidenses cuyas jubilaciones asegura, *¡es el principal instigador del ataque de Bush contra la seguridad social!*

El Instituto Cato llama a su plan chupasangre “La solución del 6,2%”. Consiste en desviar el impuesto salarial de

1. “Potenciar a los trabajadores: La privatización de la seguridad social en Chile”(Fundación Cato, Washington, D.C., enero de 1996).

6,2%, que ahora va al Seguro Social, a una cuenta privada. Tras unos años de transición, esto sería obligatorio para los estadounidenses nacidos después de 1954.

José Piñera insiste “en principio”, que los patrones —que ahora aportan lo mismo que sus empleados al Seguro Social—, no deberían aportar absolutamente nada. Así ocurre en el “modelo chileno” que tanto impresiona a Bush.

Otros grupos de Wall Street que promueven la privatización del Seguro Social son el Club del Crecimiento, que dirigen Stephen Moore, quien fuera asesor del ex representante Dick Armey, y Charles Brunie, titular de Oppenheimer Capital; la Alianza para la Seguridad de la Jubilación del Trabajador, que incluye a la Asociación de la Industria de Valores, a la Cámara de Comercio de los EU, a Charles Schwab y otros corredores; y el Instituto de la Compañía de Inversiones de Ahern.

Junto con el Instituto Cato, el American Enterprise Institute y los organismos propagandísticos de los banqueros, estos dráculas pretendían gastar 41 millones de dólares en propaganda durante el mes de enero, para robarse el Seguro Social.

Con este folleto del Comité de Acción Política de LaRouche, el demócrata Lyndon LaRouche te moviliza para detenerlos.

Pinochet y Pinocho

George ‘Enron’ Bush miente sobre el ‘Enron II’

por Paul Gallagher

Conozca las mentiras que han propalado Wall Street y Bush sobre la privatización del Seguro Social:

Mentira número 1: “El presidente Bush nunca dijo ‘privatización’. Él sólo quiere fortalecer el Seguro Social. Sus oponentes quieren asustar a la gente”.

La verdad: Ésta fue para los incautos durante la campaña electoral, que pensaban que George W. Bush era su señor y salvador personal. Mintió al respecto en múltiples ocasiones, pero después de las elecciones salió en público a exigir la privatización. Todos los miembros de su Comisión Presidencial sobre el Seguro Social fueron seleccionados a dedo *en el 2001*, a condición de que apoyaran la privatización del Seguro Social.

Mentira número 2: “Para garantizar que los ahorros para las pensiones de los jubilados de Estados Unidos no se desvíen hacia ningún otro programa, mi presupuesto protege todo el superávit del Seguro social para el Seguro Social, y sólo para el Seguro Social”. Discurso de Bush ante una sesión conjunta del Congreso el 27 de febrero de 2001.

La verdad: desde entonces los presupuestos de George W. Bush han tomado 509.000 millones de dólares del superávit del fondo del Seguro Social y los han destinado a los gastos generales del presupuesto federal, incluyendo para sus guerras, cosa de cumplir con los recortes de los impuestos de las empresas y estadounidenses adinerados.

Aunque otros presidentes también han “tomado prestado”

los excedentes del Seguro Social, *Bush y su padre han sido los únicos dos presidentes que han saqueado cada dólar de superávit que haya entrado al fondo del Seguro Social durante su gestión*. En un discurso en el seno del Senado, el senador Harry Reid, demócrata por Nevada, correctamente calificó esto como “desfalco”.

Mentira número 3: “Pienso que algunos miembros del Congreso deben aprender las lecciones de Chile, en particular lo que toca a cómo administrar nuestros planes de pensión. Nuestro sistema de seguridad social necesita modernizarse”. George W. Bush en Chile en abril de 2001.

La verdad: La privatización del Seguro Social fue impuesta en Chile por la dictadura militar fascista del general Augusto Pinochet, la que para 1980 ya había destruido al movimiento obrero, deprimido el salario de los chilenos, exiliado y asesinado a los dirigentes de la oposición, y estaba vendiendo las empresas estatales a los banqueros extranjeros, a precio de gallina flaca; luego le entregaron los fondos de pensión públicos a los mismos banqueros. Una generación después, la mayoría de los jubilados chilenos ni siquiera cumplen los requisitos para una pensión mínima con sus “cuentas privadas”, y tienen que depender del raquíico apoyo estatal a los jubilados. El Gobierno chileno, y hasta el Banco Mundial, consideran un fracaso la privatización de la seguridad social en Chile.

Lo mismo ha fracasado la privatización de los fondos de pensión en la Gran Bretaña.

Mentira número 4: La seguridad social es un programa estatal inventado en Prusia en el siglo 19, que le impide al empleado ser “dueño” de su propio fondo de jubilación.

La verdad: La seguridad social la estableció el presidente Franklin D. Roosevelt porque la Constitución de EU ordena al Gobierno de los Estados Unidos “promover el bienestar general”, no promover las inversiones privadas. El Seguro Social salvó a la gente mayor de la indigencia a la que los empujó el derrumbe de la “inversión privada” en los años veinte. Acorde al principio del bienestar general, las generaciones más jóvenes sostienen la seguridad básica de las generaciones mayores en su jubilación, salvándolas de la pobreza, y aportan un excedente en provecho de sus hijos y nietos.

El Seguro Social ha sido un éxito durante los últimos 70 años, en un lapso de tres generaciones de jubilados en los EU, y para mantener su compromiso en lo futuro sólo se necesitan pequeños ajustes ocasionales en las tasas y el alcance del gravamen. Es la única cosa solvente en la endeudada y deficitaria economía de los EU. Tres cuartas partes de los fondos de pensión de las compañías en la nación, han sido abandonados por las empresas patrocinantes, y el resto está sin fondos; el Seguro Social sigue solvente y confiable. Ha aportado mejores beneficios amplios, con ajustes para el costo de la vida, que los planes de seguro social privados tales como el sistema

británico, el “Plan Galveston” de Texas, etc. En cuanto al “modelo chileno” de los privatizadores, ha resultado un desastre total para más de la mitad de la fuerza laboral chilena.

Mentira número 5: “El gobierno de los EU. no tiene la obligación legal de pagarle a los jubilados prestaciones del Seguro Social”.

La verdad: La administración del patrimonio y el pago de las prestaciones por parte del gobierno federal, es una obligación de los Estados Unidos estipulada por la ley del Seguro Social de 1935. Los ideólogos derechistas de la privatización del Instituto Cato y otras partes, alegan esto porque quieren que el Departamento del Tesoro siga “tomando prestado” del fondo del Seguro Social sin tener que pagarle, y destruir al Seguro Social por motivos ideológicos. Cualquier argumento en ese sentido por parte del gobierno constituiría una *amenaza* de recortar las prestaciones.

Mentira número 6: “El Seguro Social está en crisis. La crisis ya llegó. Hay un déficit de \$11 billones de dólares”.

La verdad: Lo que está en crisis es Wall Street; el dólar estadounidense está en crisis; la economía de los EU y del mundo están en un crisis de desintegración agravada por las medidas del Gobierno de Bush; pero el sistema de seguridad social del presidente Franklin D. Roosevelt no está en crisis. Ninguna agencia competente ha proyectado un déficit de 11 billones de dólares, ni la mitad de eso.

Pero los recortes de impuestos que hizo Bush a las empresas y personas de mayores ingresos están generando un *déficit de 14 billones de dólares a largo plazo en el presupuesto general del gobierno federal*. Bush le quiere añadir a la deuda pública de dos a seis billones de dólares para pagar la privatización del Seguro Social, y entregarle a Wall Street las recaudaciones en “cuentas privadas”, para luego pedirle prestado a Wall Street el dinero para pagar las prestaciones de jubilación.

Si el Gobierno de Bush dejara de crear sus enormes déficit y le pagara al Seguro Social el dinero que impropriadamente apropió del fondo del Seguro Social para otros gastos gubernamentales a lo largo de los años, el Seguro Social tendría un superávit cuando menos por otros 40 años, *sin modificar la tasa de gravamen a la nómina ni el alcance del mismo*. Si un Presidente de los EU, en vez de perder empleos y deprimir los salarios, sabe cómo reiniciar el crecimiento del empleo real de alta tecnología en la economía estadounidense, el Seguro Social tendrá solvencia plena durante todo el siglo 21.

Mentira número 7: “Si no se privatiza el Seguro Social ahora, el gobierno tendrá que elevar los impuestos o endeudarse por billones de dólares, o recortar las prestaciones”.

La verdad: Esta es otra forma de chantajear y amenazar, de un Gobierno de Bush quebrado y un Wall Street desesperado, con recortar las prestaciones del Seguro Social si no les

entregan los billones de dólares de recaudaciones del Seguro Social para sostener la burbuja de Wall Street un rato más. En verdad, el crecimiento económico real, con tan sólo pequeños ajustes en el alcance del gravamen para el Seguro Social, mantendrá al sistema solvente por tiempo indefinido.

Mentira número 8: “Wall Street no tiene tanto que ver en la privatización del Seguro Social; sus comisiones sólo sumarían a unas cuantas decenas de miles de millones en 70 años”.

La verdad: Los bancos de Wall Street y de la “Bóveda” de Boston, tales como el JP Morgan Chase y el State Street Bank, son los financistas originales y los que más aportan al proyecto de privatización del Seguro Social del Instituto Cato, el factor clave de todos los planes para saquear al Seguro Social desde 1995. Estos bancos cargarían, según cálculos conservadores, con 950.000 millones de dólares en comisiones durante 70 años, de acuerdo con el estudio detallado realizado por el profesor Austen Goolsby de la Universidad de Misurí. Más aún, Wall Street arrastraría billones en cuentas nuevas a las manguantes bolsas de valores.

Mentira número 9: “Los trabajadores más jóvenes podrán decidir voluntariamente destinar sólo una parte de sus cuotas de Seguro Social a cuentas de inversión privadas”.

La verdad: El modelo de privatización de Chile fue obligatorio para todos los trabajadores jóvenes. Les negaron la entrada al antiguo sistema público de pensiones.

El ministro del Trabajo del general Pinochet, quien privatizó la seguridad social en Chile, ahora encabeza el proyecto de privatización del Instituto Cato, el cual instigó la frenética campaña de privatización del presidente Bush. El plan del Instituto Cato de abrir cuentas privadas se hace *obligatorio* después de unos años, para todos los empleados nacidos después de 1954; y exige canalizar *todo, no sólo parte*, de las cuotas de Seguro Social que le corresponden al empleado, a una cuenta privada.

Esto es lo que pasará si Bush se sale con la suya. Habrá tremendas presiones económicas y políticas para reducir las prestaciones futuras, sacando a los trabajadores del sistema del Seguro Social para dejarlos en manos de los bancos de inversión de Wall Street. ¿Por qué? Los billones de dólares que Bush se propone tomar prestado como nueva deuda pública para privatizar el sistema, *crearán la crisis que alega en el Seguro Social que él alega existir*.

Mentira número 10: “Para los jubilados o próximos a jubilarse nada cambiará; el pago de sus prestaciones no se tocará”.

La verdad: Si se impone la privatización, habría una reducción de 18 billones de dólares en prestaciones. Para los jubilados que forman parte del 20% de ingresos medios, ha-

bría una *reducción* de 6% en las prestaciones del Seguro Social en la próxima década, de 10% en la década siguiente, y 15% en la posterior, según el plan de privatización propuesto por la comisión seleccionada por Bush. Esto lo demostró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC); y Stephen Goss, de la comisión presidencial, admitió el 9 de diciembre de 2004: “El plan de privatización de Bush, sin duda ofrecería un crecimiento más lento de las prestaciones que la ley actual. Las cuentas privadas le proporcionarían al trabajador la oportunidad de resarcirlas”. Goss estima que habría un recorte de 18 billones de dólares en prestaciones para mediados del siglo. El presidente Bush *sabía esto hace tres años, cuando la comisión presentó sus recomendaciones*.

En realidad, a pesar de los supuestos fantásticos embusteros de estos ideólogos sobre los ingresos que supuestamente obtendrían los trabajadores jóvenes en los mercados de acciones y bonos, la triste realidad es que las prestaciones del Seguro Social que les queden a los estadounidenses serían más reducidas de lo que calcula la Oficina de Presupuesto del Congreso, de aprobarse la privatización fascista de Bush. Tras inflarse brevemente la nueva burbuja con los billones robados del Seguro Social, Wall Street reventará y dejará sin nada a los jubilados. “Enron I” dejó a cientos de miles de trabajadores con los fondos de jubilación *401k* vacíos y sin las pensiones de sus empresas; el “Enron II” de Bush le robará las pensiones *a decenas de millones*.

Mentira número 11: “Los trabajadores más jóvenes obtendrán cuentas privadas que el gobierno nunca les podrá quitar”.

La verdad: El Gobierno de Bush ya le ha “quitado” más de 500.000 millones de dólares de forma ilícita al fondo del Seguro Social para pagar otros gastos del gobierno; no obstante, el Seguro Social nunca le ha quitado sus pensiones a los jubilados. Si los estadounidenses se caen en la trampa de desviar sus cuotas de Seguro Social a cuentas de acciones y bonos, un crac de Wall Street les “quitaría” los fondos de jubilación que fueron tan tontos de invertir ahí.

Mentira número 12: “Las inversiones bursátiles reditúan más en el largo plazo. Gracias al principio del interés compuesto, estos trabajadores más jóvenes podrán obtener mejores rendimientos en sus fondos de jubilación”.

La verdad: De haberse invertido los impuestos de Seguro Social de los salarios de los trabajadores estadounidenses en las acciones del índice de las 500 de Standard and Poor’s durante los últimos cinco años, *hubieran perdido dinero, en conjunto, en sus “cuentas privadas”*, de acuerdo con la misma Standard and Poor’s.

Esto repite el síndrome de Enron con los fondos de pensión privados estadounidenses llamados *401k*; según las encuestas, la tercera parte de los estadounidenses que tienen cuentas *401k* dice que perdió tanto en ellos que tendrá que

seguir trabajando mucho tiempo después de llegar a la edad de jubilación. El Seguro Social caerá “en crisis” de verdad si se le permite al presidente Bush pasárselo a Wall Street.

El presidente idiota, cuyos negocios privados todos han fracasado, cree que acaba de descubrir el “milagro del interés compuesto”. El fondo del Seguro Social ya obtiene un interés compuesto en la inversión de su superávit en bonos del Tesoro; y todos los años la Casa Blanca de Bush ha saqueado el superávit y los intereses del fondo para pagar la guerra, la “seguridad interna”, y los recortes en los impuestos a las empresas y a los estadounidenses adinerados.

Arnie está instaurando una economía fascista en California

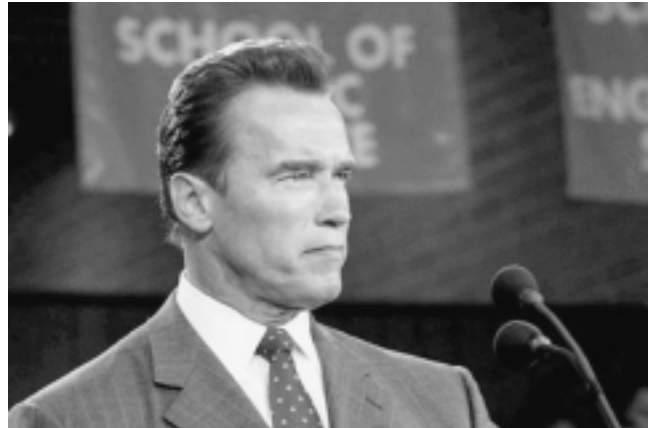
por Harley Schlanger y Paul Gallagher

Vean la California del “Governator” Arnold Schwarzenegger, para darnos una idea de la austeridad fascista que encaran el Seguro Social, Medicare y Medicaid de no cerrar la puerta que George W. Bush está abriéndole al fascismo.

La complacencia que muestra el musculoso actor Schwarzenegger por los matrimonios homosexuales y otros símbolos del “izquierdismo cultural”, no encubren sus políticas económicas fascistas. Él es el nuevo protegido político del mismo George Shultz de la Bechtel que difundió el “modelo chileno” en el Gobierno de Reagan, y que reunió al equipo de gobierno de George Bush conocido como “los Vulcanos”. La familia y los antecedentes personales de Arnie, a quien ahora están “inflando” para tratar de cambiar la Constitución de los Estados Unidos y lanzarlo a la Presidencia, revelan su declarada admiración por Adolfo Hitler, por ser un “dictador carismático”.

La deuda nueva está aplastando al estado

Como gobernador, Schwarzenegger usó el mismo método de la burbuja de deuda en la crisis presupuestal de California (creada por la desregulación eléctrica), que Bush quiere usar con el Seguro Social: pidió prestadas sumas enormes de dinero, al tiempo que les quitó impuestos a los ricos. Arnie puso a trabajar su famosa imagen de matón es sus mítines multitudinarios a favor del referendo que sacó al entonces gobernador Gray David, a fin de coaccionar a los legisladores demócratas a seguirle la corriente. Su Gobierno de inmediato consiguió un préstamo de 15 mil millones de dólares —una suma enorme,



El “Governator” de California, Arnold Schwarzenegger, es un heraldo de la austeridad fascista. (Foto: sitio electrónico del gobernador).

incluso para California— de Wall Street, a altas tasas de interés.

No tomó mucho para que se le rompiera el barzón a la yunta fascista de Arnie. Los informes presupuestales del 20 de diciembre de 2004 muestran que al estado, que se tambalea rumbo a la bancarrota, lo abruma el pago de la deuda. Arnie ahora prepara un programa de recortes enormes.

La oficina de finanzas de la legislatura informó que en el año de gobierno de Schwarzenegger la deuda total de California ha pasado de 33 mil millones de dólares, a 51 mil millones, y que los pagos de deuda se han disparado de 3,4% del presupuesto, a un ruinoso 6,4%, y todo indica que seguirán aumentando con rapidez. En los últimos meses, el déficit presupuestal estimado para el próximo año fiscal pasó de 6,7 mil millones de dólares, a al menos 8,1 mil millones.

Lo que vienen son recortes homicidas

¿Quién va a pagar esto?

El 17 de diciembre de 2004 el director de Finanzas de Schwarzenegger, Tom Campbell, dijo que la salud y los servicios humanos sufrirían los peores recortes, para poder “cerrar” este déficit. Estos recortes golpearán con mayor fuerza a los pobres, a los ancianos y a los discapacitados. La guillotina también caerá sobre la construcción de escuelas, caminos, proyectos hidráulicos y otra infraestructura económica. Arnie tasajeará a Medi-Cal, que es la proveedora de servicios médicos de unos 6,5 millones de californianos de bajos recursos. Esto agravará la ya peligrosa escasez de hospitales, en especial de las salas de emergencia y de cuidados intensivos; los recortes impuestos hasta ahora ya han creado una crisis de salud en el condado de Los Ángeles. Más de 4 mil millones de fondos de los impuestos estatales a la venta de gasolina, que estaban destinados a proyectos de transporte, fueron malversados para reducir el déficit presupuestal.

En cuanto a la educación, el número de estudiantes inscritos en el sistema de universidades estatales ha disminuido,

mientras que las colegiaturas han aumentado a un ritmo de más del 6% anual. Aquellos que no pueden pagar las cuotas de las prestigiosas escuelas estatales, han sufrido los recortes enormes hechos a los colegios públicos y la escasez de ayuda financiera. Tal parece que Schwarzenegger romperá el acuerdo que hizo con los maestros, quienes aceptaron un corte de 2 mil millones de dólares este año, a cambio de la promesa de recibir más fondos el año próximo.

El saqueo de California encabezado por Enron mediante la desregulación eléctrica, la cual se tragó más de 70 mil millones de dólares del estado, sólo fue la primera fase.

La cruel indiferencia del Gobernador Schwarzenegger por aquellos a quienes sus políticas están dañando salió a relucir a principios de diciembre, cuando se mofó de las enfermeras que protestaban en su conferencia sobre las mujeres y las familias. “No le presten atención a esas voces de allá”, gruñó Arnie. “Son los intereses especiales. . . Los intereses especiales no me quieren en Sacramento porque siempre les estoy pateando el trasero”.

La conferencia la organizaban la British Petroleum, Allstate, Citigroup y Bank of America. Pero las enfermeras —no los grandes bancos ni las compañías aseguradoras— representan los abominables “intereses especiales” para un fascista como Arnie.

Así les pasará a los trabajadores que protesten por las pérdidas que reporten sus cuentas para el retiro en Wall Street, si no paramos la privatización del Seguro Social al estilo “modelo chileno” de Bush.

Más que lo del robo del Seguro Social ata a Pinochet y a Bush

por Carl Osgood

El saqueo del Seguro Social no es lo único que tienen en común los regímenes de Pinochet y de Bush. Del mismo modo que Pinochet necesitó 8 años de represión brutal y de masacre de sus oponentes políticos para poderse robar los fondos de pensiones de los trabajadores, así el Gobierno de Bush no se hubiera atrevido a emprender su actual campaña para aplicar el “modelo Pinochet” sin haber adelantado esfuerzos draconianos semejantes. En el caso del Gobierno de Bush y Cheney, el equivalente al golpe de Pinochet fue el ataque del 11 de septiembre, el cual les brindó el precedente estilo “incendio del Reichstag” para iniciar una brutal represión interna bajo la denominada ley “Patriota”, y una agresiva campaña mundial de asesinatos contra presuntos “terroristas”. En el caso



Los equipos de “cazadores” asesinos que el secretario de Defensa de los EU, Donald Rumsfeld, está desplegando, siguen el modelo de la Operación Cóndor de la era de Pinochet.

del Chile de Pinochet, el programa mundial de asesinatos tuvo el nombre clave de Operación Cóndor. Hoy el Gobierno de Bush tiene un programa muy parecido, en el muy anunciado plan de “reforma militar” del secretario de Defensa Donald Rumsfeld.

El parecido difícilmente es una coincidencia. Una de las primeras medidas que tomó la junta militar de Pinochet al tomar el poder luego del golpe de 1973, fue la de abrogarse poderes extraordinarios de Estado policíaco, los cuales durante muchos años siguieron renovándose cada 6 meses, porque dizque la situación de seguridad nacional lo justificaba. En julio de 1977, según un memorando escrito por el subdirector de operaciones de la CIA, Pinochet y el general Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, “creen. . . que hay una amenaza interna grave en Chile, y que los métodos empleados por la DINA para eliminar dicha amenaza han estado plenamente justificados”. Entre estos métodos estaban la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales y los asesinatos, y por lo general iban dirigidos contra la oposición política de izquierda.

De igual modo, luego del 11 de septiembre del 2001 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encerró a miles de hombres de origen árabe o sudasiático, con el pretexto de que eran sospechosos de realizar actividades terroristas, y los retuvo en secreto, a veces durante semanas o meses, sin presentar una acusación formal o siquiera mencionar sus nombres ni el lugar donde estaban detenidos. El procurador general John Ashcroft emitió directrices nuevas que permitían vigilar a organizaciones religiosas y políticas, y a individuos, sin que mediaran pruebas de que hubieran hecho algo



El presidente estadounidense George W. Bush.

malo. Entonces acudió al Congreso, y le exigió que incluyera en los códigos estas medidas y otras de Estado policíaco, lo cual fue aprobado y recibió el infortunado nombre de ley Patriota de los Estados Unidos.

Entre otras cosas, la ley Patriota amplía la autoridad de las fuerzas policiales para realizar investigaciones secretas, le da plena libertad de interceptar llamadas y comunicaciones de internet, y le da acceso a registros que suelen ser privados con un mínimo de supervisión judicial.

La aprobación en diciembre de 2004 del proyecto de ley para reformar los servicios de inteligencia fue otro paso en este proceso, con la inclusión de una serie de disposiciones en la mentada ley “Patriota II”. Esta nueva ley rompe aun más la división histórica que separa las operaciones de inteligencia nacionales de las internacionales, cobijándolas bajo un mismo techo, y le agrega una provisión a la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior de 1978, la llamada provisión “lobo solitario”, que convierte en sospechoso de terrorismo a cualquier persona que no sea estadounidense, sin considerar si existe o no conexión alguna con un gobierno o con una organización terrorista que esté sujeta a las órdenes de vigilancia de la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA). Aunque la ley específica que su objetivo son sólo los “no estadounidenses”, la persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento de Lyndon LaRouche en los 1980 demuestra que la FISA también puede cometer abusos contra estadounidenses.

Del mismo modo, la DINA de Pinochet combinó las funciones de inteligencia de la policía y del Ejército bajo el mismo jefe, Contreras, quien le rendía cuentas directamente a Pinochet. Contreras fue uno de los pioneros de la Operación Cóndor, que fue un acuerdo de cooperación que también involucró a Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Un memorando de la CIA del 11 de agosto de 1976 señalaba que, según informes, los funcionarios de seguridad de Chile,

Argentina y Uruguay estaban “ampliando sus actividades antisubversivas conjuntas, al grado de incluir el asesinato de terroristas de alto nivel asilados en Europa”. Más adelante añadía que la Operación Cóndor ya había incluido el desarrollo de una capacidad de recabación de información y una dirección de operaciones conjuntas en el sur de Sudamérica. Al menos en lo que a Chile concierne, los “terroristas” eran, por definición, los opositores al régimen de Pinochet, tales como Orlando Letelier, quien fue embajador de Chile en Washington y luego ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Salvador Allende, a quien Pinochet derrocó con el golpe de septiembre de 1973.

Más tarde Contreras, junto con otros, fue enjuiciado y condenado por el asesinato de Letelier en 1976. Nunca hubo una acusación contra Pinochet, aunque lo más seguro es que el asesinato no pudo ocurrir sin su conocimiento, si no es que su autorización.

Para el Gobierno de Bush lo del 11 de septiembre fue el equivalente a un golpe de Estado. Sin los ataques no hubiera podido imponer las medidas de Estado policíaco de la ley Patriota ni justificar la guerra contra Iraq. Su versión de la Operación Cóndor la está armando el subsecretario de defensa Stephen Cambone y su subalterno militar, el teniente general William G. “Gerry” Boykin, en el Pentágono. El *New York Times* informó el 19 de diciembre de 2004 que Cambone y Boykin están preparando una propuesta para que el Departamento de Defensa tome a su cargo operaciones secretas y de inteligencia humana, mismas que tradicionalmente le competen al organismo civil de la CIA. “En estos momentos estamos considerando la idea de darle algo de la flexibilidad que por años ha tenido la CIA a algunas fuerzas de Operaciones Especiales”, le dijo un funcionario de Defensa al *Times*.

Aunque el *New York Times* no lo menciona, es probable que uno de los prototipos de esta nueva capacidad sean los equipos de “cazadores” asesinos que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld ha desplegado en Iraq y Afganistán, conocidos como Zorro Gris, Fuerza en Misión Especial 121 y otros nombres. Estos equipos, integrados por personal de la CIA y del Ejército, tienen la tarea de cazar y asesinar a presuntos terroristas.

Sólo después de 8 años de represión bajo un Estado policíaco, después de que toda oposición fue aplastada —incluso el movimiento laboral—, el régimen de Pinochet emprendió el robo del sistema público de pensiones. El Gobierno de Bush, tras imponer medidas casi idénticas, ahora va camino a robarse el Seguro Social en favor de los banqueros sinarquistas. Sin embargo, a diferencia de Chile, la oposición política al plan de Bush está vivita y coleando, y la encabeza Lyndon LaRouche.